

La desobediencia civil

Henry David Thoreau

"El mejor gobierno es el que gobierna menos." Esta afirmación expresa un ideal: el gobierno existe para servir a los ciudadanos y no para dirigir todos los aspectos de sus vidas. Sin embargo, incluso un gobierno democrático puede convertirse en un instrumento de injusticia cuando sus decisiones favorecen la opresión o la violencia. En esos casos, los ciudadanos no deben obedecer ciegamente, sino actuar conforme a su conciencia.

Los gobiernos suelen presentar sus acciones como si representaran la voluntad de todo el pueblo, pero muchas veces responden únicamente a los intereses de una mayoría o de un pequeño grupo con poder. La historia demuestra que un Estado puede iniciar guerras injustas, permitir la esclavitud o mantener leyes que perjudican a parte de la población. Que una ley haya sido aprobada legalmente no significa que sea justa.

La mayoría gobierna porque tiene más fuerza política, no porque posea siempre la razón. La justicia no depende del número de personas que apoyen una decisión, sino de los principios morales que la sustentan. Por eso, cada individuo tiene la obligación de examinar las acciones del gobierno antes de obedecerlas. El ser humano no debe renunciar a su conciencia para convertirse simplemente en un ciudadano obediente. Antes que súbditos del Estado, somos personas capaces de distinguir entre el bien y el mal. Cuando una ley obliga a participar en una injusticia, la verdadera responsabilidad consiste en negarse a colaborar.

Durante mi tiempo, el gobierno de Estados Unidos sostenía la esclavitud y libraba una guerra contra México. No podía aceptar que el dinero de mis impuestos contribuyera a financiar esas acciones. Por esta razón decidí no pagar el impuesto personal que el Estado exigía. Mi propósito no era destruir el gobierno, sino evitar ser cómplice de aquello que consideraba inmoral.

Como consecuencia de esta decisión fui encarcelado durante una noche. Aquella experiencia me permitió comprender que el Estado únicamente tiene poder sobre el cuerpo de las personas. Puede encerrarlas, imponerles multas o castigarlas, pero no puede obligarlas a pensar de determinada manera ni dominar completamente su conciencia. Mientras permanecía en la cárcel, comprendí que, en una sociedad injusta, el lugar del hombre honesto puede ser precisamente la prisión.

Muchas personas consideran que basta con votar para cumplir su deber como ciudadanos. Sin embargo, depositar un voto cada cierto tiempo no equivale a actuar en favor de la justicia. Quien únicamente espera que las mayorías resuelvan los problemas termina

aceptando pasivamente las decisiones del gobierno, incluso cuando estas producen sufrimiento.

Existen quienes reconocen que una ley es injusta, pero prefieren obedecerla mientras esperan que algún día sea modificada. Esta actitud permite que la injusticia continúe. Cada día que una ley injusta permanece vigente significa que otras personas siguen siendo víctimas de ella. Si una ley convierte a un ciudadano en instrumento para perjudicar a otro, entonces esa ley merece ser desobedecida.

No sostengo que deban desobedecerse todas las leyes. Muchas son necesarias para garantizar la convivencia. Lo que afirmo es que ninguna ley merece obediencia cuando obliga a cometer una injusticia evidente. En esas circunstancias, el deber moral supera al deber político. La mayoría de los funcionarios públicos ejecuta las órdenes del Estado sin detenerse a pensar en sus consecuencias. Soldados, policías, jueces y burócratas cumplen sus funciones mecánicamente, como si fueran piezas de una máquina. Cuando esto ocurre, dejan de actuar como seres racionales y se convierten en instrumentos del poder. La obediencia absoluta destruye la responsabilidad moral.

El verdadero respeto no consiste en obedecer siempre la ley, sino en respetar la justicia. Una persona íntegra no pregunta únicamente qué exige la legislación; también se pregunta si aquello que hace es correcto. La conciencia no puede ser reemplazada por ningún código jurídico. Algunos sostienen que el individuo debe sacrificar sus convicciones por el bienestar del Estado. Yo sostengo lo contrario: el Estado existe para proteger la libertad y la dignidad de las personas. Cuando deja de hacerlo, pierde parte de su legitimidad moral.

La riqueza también puede convertirse en un obstáculo para la libertad. Quien depende excesivamente de sus bienes materiales teme enfrentarse al gobierno porque puede perder privilegios, propiedades o comodidad. En cambio, quien necesita poco posee mayor independencia para defender sus principios. La libertad exige cierto desapego frente a las posesiones y al reconocimiento social.

No propongo la violencia como solución a los conflictos políticos. La fuerza puede derribar un gobierno, pero difícilmente construye una sociedad más justa. La verdadera resistencia consiste en retirar pacíficamente el apoyo que mantiene vivo un sistema injusto. Cuando suficientes ciudadanos dejan de colaborar con la injusticia, el gobierno se ve obligado a transformarse.

La desobediencia civil implica aceptar las consecuencias de los propios actos. Quien decide incumplir una ley injusta no busca escapar del castigo, sino demostrar públicamente que existe una contradicción entre la legalidad y la justicia. El encarcelamiento, lejos de ser una derrota, puede convertirse en una forma de denunciar la inmoralidad de las leyes.

No espero que todas las personas abandonen inmediatamente sus ocupaciones para luchar contra cada injusticia. Sin embargo, sí considero que nadie debería contribuir deliberadamente al mal. Basta con dejar de apoyar aquello que la conciencia rechaza. Cada ciudadano posee una cuota de responsabilidad en la construcción de la sociedad. Imagino un Estado verdaderamente libre, uno que reconozca que la autoridad proviene de los

individuos y no al contrario. Un gobierno justo respetaría la diversidad de pensamiento, admitiría la crítica y comprendería que el desacuerdo fortalece la democracia en lugar de debilitarla. Un Estado así no temería a los ciudadanos conscientes, sino que encontraría en ellos su principal riqueza.

Mientras ese ideal no exista, la responsabilidad continúa recayendo sobre cada persona. Ninguna ley, ninguna mayoría y ningún gobernante pueden sustituir el juicio moral del individuo. Allí donde el poder pretende imponerse sobre la justicia, la conciencia debe convertirse en el último refugio de la libertad.

Por eso sostengo que la obligación más importante de todo ciudadano no consiste en obedecer siempre al gobierno, sino en procurar que sus acciones nunca contribuyan a la injusticia. Solo cuando los individuos asumen esta responsabilidad es posible construir una sociedad verdaderamente libre y una democracia fundada no solo en las leyes, sino también en la justicia.